

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DEL CONTRATO DE "VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-NORTE, DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID"**Expediente: A/SER-004381/2021**

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer mediante el contrato de referencia.

El contrato A/SER-000652/2017 del servicio de Vigilancia y Seguridad en la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte finaliza el 30 de junio de 2021 por lo se hace precisa la licitación de un nuevo contrato.

La tarea de vigilancia y protección del edificio no puede ser prestada por empleados públicos de la Comunidad de Madrid competentes al no existir categoría de funcionarios o personal laboral con dichas funciones en la relación de puestos de trabajo, por lo que se debe recurrir a personal integrado en empresas privadas con formación específica en controles de acceso y gestión de sistemas y equipos de seguridad. Esta circunstancia se acredita en el preceptivo informe de insuficiencia de medios propios del Organismo que obra en el expediente.

Por lo tanto, la necesidad de acudir a medios ajenos a la Administración deriva la idoneidad de la celebración de un contrato administrativo de servicios, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que prestaría el servicio, de lunes a viernes, con horario de 8:00hs a 20:00hs.

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y del personal que presta servicio en la Dirección de Área, de acuerdo con la normativa vigente se requiere de una empresa especializada en el sector que habrá de tener la condición de empresa de seguridad, conforme a la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 5/2017, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que cuente con la debida autorización administrativa en vigor para la prestación de los servicios de seguridad descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente contrato y que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, previsto en el artículo 11 del citada Ley 5/2014, de 4 de abril.

La tarea de vigilancia y protección será realizada por vigilantes sin arma, debidamente acreditados por la Dirección General de Policía, y formados y



documentados conforme a lo establecido en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Sus funciones están desarrolladas en la ley de referencia así como como aquellas especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De entre ellas destacan:

- Protección y vigilancia de las personas, inmuebles y bienes muebles.
- Vigilancia exterior e interior.
- Control de accesos.
- Vigilancia y control de instalaciones.
- Colaboración en situaciones de emergencia.
- control y custodia de las llaves que se les confíen.
- Retirada de carteles
- Control de entrada y salida de maquinaria, mobiliario y demás elementos y materiales en las sedes objeto del contrato.

Además, es necesario llevar a cabo otras prestaciones, como el servicio de conexión a central receptora de alarmas (CRA); esta prestación es necesaria debido a que su incumplimiento provocaría que no se pudiera prestar el servicio adecuadamente, en los momentos en que no están presentes los guardias de seguridad, en horario distinto del de su jornada de trabajo. Este período de no presencia física de los guardias de seguridad, provoca que el servicio de seguridad sólo quede cubierto por la conexión a la CRA.

En definitiva, una Dirección de Área Territorial de Educación dedicada a funciones de interés público, como Administración Pública, que maneja datos de carácter personal y, sobre todo, relacionados con menores, requiere la prestación de un servicio de vigilancia y de seguridad.

Madrid, 25 de febrero de 2021.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ignacio García Rodríguez

